

Jerarquía mata federalismo

Mauricio Merino

Es muy probable que la decisión no sólo haya sido acertada sino que además haya sido indispensable: algo que debía hacerse y punto. Es posible que no cupiera ninguna duda sobre la culpabilidad de los arraigados, ni tampoco sobre la necesidad imperiosa de actuar de inmediato para dismantelar las redes a las que esos funcionarios corruptos, según se dice, estaban obedeciendo. Tal vez fue también una decisión valiente y audaz. Y, sin embargo, la forma en que se llevó a cabo no acaba de convencerme.

Conste que me rindo antes de dar guerra: no tengo nada que alegar sobre la importancia de impedir, a toda costa, que el crimen organizado influya sobre las decisiones de las autoridades municipales. El principio me parece impecable y creo, siguiendo el argumento ya presentado por María Amparo Casar, que es inútil aplaudir o descalificar esta decisión del gobierno a partir de sus intenciones políticas. Tampoco me opongo al propósito explícito de romper las complicidades establecidas entre los gobiernos locales y los cárteles criminales, ni al mensaje implícito que esta operación emite al resto de los gobiernos municipales. Creo que nadie sensato podría oponerse al objetivo de apresar a cualquier funcionario que se asocie o favorezca a los criminales.

Sin embargo, no sólo me produce desasosiego pensar que cualquier autoridad local pueda ser secuestrada, casi literalmente, por las bandas del crimen que cada día parecen más violentas y poderosas, sino el hecho mismo de estar viviendo en la duda y la zozobra. Tal como han sucedido las cosas, de repente un puñado de funcionarios puede caer en manos de la Policía Ministerial Federal bajo la sospecha de mantener vínculos con el narcotráfico, sin más trámite que el uso de la fuerza ni más argumento que el de la autoridad concedida al Ministerio Público. En una sola noche, 10 alcaldes electos por el voto popular pueden ser detenidos al mismo tiempo, sin que medie ningún protocolo ni intercambio alguno de información con el gobernador del estado ni, por supuesto, con la sociedad. Bastan los datos reunidos y custodiados por la PGR, para que las autoridades locales vayan directamente a la cárcel.

Creyente de las bondades del federalismo y de la fuerza social que puede producir la vida

municipal, este episodio me ha dejado un pésimo sabor de boca. Como ciudadano común y corriente, debo asumir que la PGR está actuando con tanta eficacia como honestidad; que sus métodos de investigación están funcionando perfectamente, que son imparciales, y que no hay nada ni nadie que haya influido en la selección de los funcionarios y de los municipios que finalmente fueron defenestrados. No tengo ninguna razón objetiva para creer lo contrario. Pero de momento estoy obligado a creer, pues no tengo más información ni mejores elementos de juicio para darme una opinión razonada que la jerarquía y el recuento de facultades de la PGR. Ante el dilema, me están pidiendo que tenga fe en la autoridad federal, que desconfíe del gobierno estatal (pues no podía ser informado antes) y que afirme la complicidad de los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque estamos en guerra contra el crimen organizado y porque todo lo anterior se deriva de la información clasificada que está en manos de la PGR.

Supongo que, con el paso de los días, tendremos mejores elementos de juicio para sentirnos más cómodos con las decisiones tomadas y para afirmar que no se trató de un ejercicio de autoridad sin sustento. Pero preocupa que en esta guerra no sólo haya tan pocos paladines y tan pocos aliados, sino que los primeros vayan reuniendo cada vez más poder en sus manos y los segundos se sigan quebrando. Hasta donde tengo leído, los poderes que no tienen contrapesos pueden volverse muy peligrosos. Y todavía no encuentro ninguna razón para estar absolutamente seguro de la perfección de los procedimientos,

del personal y de las conclusiones que va ofreciendo la PGR. Quiero creer en ella y quiero pensar que todas sus decisiones son acertadas. Pero preferiría mil veces estar convencido.

Como sea, el episodio es revelador de la situación en la que estamos viviendo: cualquier autoridad puede caer en las redes del enemigo y aliarse con ellos. Pero, a juzgar por la evidencia reunida, ese riesgo es más probable a medida



Continúa en siguiente hoja

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Fecha 03.06.2009 | Sección Primera-Opinión | Página 19 |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|

que se desciende en la escala jerárquica. Son más proclives los municipios y menos las autoridades del Ministerio Público federal. Pero la verdad es que tras las decisiones tomadas salen sobrando las conjeturas. Lo que todos necesitamos es información fide-

digna y la mayor certeza posible en la calidad de las investigaciones que llevan a cabo nuestras autoridades. Las que vayan quedando tras la batalla.

Profesor Investigador del CIDE

EL EPISODIO DE MICHOACÁN

ES REVELADOR DE LA SITUACIÓN
EN LA QUE ESTAMOS VIVIENDO;
CUALQUIER AUTORIDAD PUEDE
CAER EN LAS REDES DEL
ENEMIGO Y ALIARSE CON ELLOS

